



0078-PE-01

Buenos Aires, 5 enero del 2002.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de elevar a su consideración el proyecto de ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario.

Ciertamente, el escenario social, económico y financiero de nuestro país en el presente exhibe descarnadamente las consecuencias producidas por un sistema monetario que, desde un dogmatismo no exento de contradicciones, se persistió en mantener a pesar de las claras señales de alarma que los crecientes índices de desocupación, la severa contracción productiva y el preocupante acotamiento de la actividad exportadora, entre otras variables, emitían en forma constante.

Lo que puede caracterizarse como un proceso recesivo que hoy presenta inusitada agudeza, demandaba en sus primeras insinuaciones la adopción de actos de gobierno que paulatinamente permitieran un reacomodamiento de los distintos componentes de la economía a las modificaciones que exigía el sistema monetario.

Las graves urgencias del momento obligan a transitar la etapa de adaptación aludida con mayor prontitud, por lo cual hemos intentado dotar a las normas modificatorias contenidas en el proyecto que se eleva a consideración del Honorable Congreso de instrumentos de amortiguación o mitigación de las consecuencias que es dable esperar se produzcan en una primera etapa de implementación.

En ese sentido, se estima que la especificidad propia de la reglamentación a dictarse permitirá contemplar una casuística que de ordinario es ajena a los marcos legales.

Atento a las circunstancias descritas de marcada excepcionalidad, resulta menester adoptar actos de gobierno que resulten acordes para superar tales desafíos, actos que deben encontrar en el Poder Legislativo el necesario respaldo, propio de la división de poderes que establece nuestra Constitución.

En tal sentido, y visto la situación de marcada crisis por la que atraviesa nuestro país, se considera necesario declarar la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Para enfrentar tal emergencia, se propicia delegar en el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional y por el término de dos (2) años, las facultades que resulten indispensables para disponer las medidas dirigidas a recomponer el grave cuadro de situación planteado.

En tal sentido, la norma proyectada establece que el ejercicio de tales facultades por parte del Poder Ejecutivo nacional estará fundamentalmente orientado a reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, reactivar el funcionamiento de la economía, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y favorecer la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución que resulten afectadas por las modificaciones cambiarias que se instituyen por la presente norma.

En base a las razones de emergencia antes descritas, resulta perentorio que el Poder Ejecutivo nacional arbitre el nuevo sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y que establezca, en su consecuencia, las pertinentes regulaciones cambiarias.



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*



A los fines antes mencionados, resulta menester sustituir las disposiciones contenidas en la ley 23.928, modificada por la ley 25.445, disponiendo la derogación, modificación y ratificación de diversos artículos de dicha norma, en orden a establecer nuevos principios de orden monetario y cambiario.

Los cambios impulsados por el proyecto confirman el marco de acción del Banco Central de la República Argentina, preservando y fortaleciendo su rol como garante principal del sistema monetario, financiero y cambiario, en forma acorde a las disposiciones contenidas en la norma que se somete a consideración.

A tal efecto, se determina que las reservas del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras estarán afectadas en su totalidad al respaldo de la base monetaria, debiendo dicha entidad reflejar en su balance y estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por el otro.

Asimismo, se confirma que los bienes que integran las reservas del Banco Central de la República Argentina constituyen prenda común de la base monetaria, resultando inembargables y con afectación exclusiva para su efectivo y permanente respaldo.

Habida cuenta de las modificaciones que se promueven por el proyecto que se somete a consideración respecto al sistema monetario, financiero y cambiario, resulta ineludible establecer un conjunto de disposiciones tendientes a favorecer una adecuada recomposición de las relaciones jurídicas, económicas y patrimoniales que indudablemente se verán modificadas a tenor de los cambios a introducirse.

En tal sentido, el proyecto contempla diversas situaciones que involucran deudas de dinero, ratificándose que, en ningún caso, se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, con las salvedades expresamente contempladas.

Asimismo, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar las medidas necesarias para preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubiesen realizado depósitos en pesos o en divisas extranjeras en entidades financieras, previéndose la reestructuración de las obligaciones originarias, a fin de tornar compatible el cumplimiento de los compromisos y vencimientos, en forma acorde a la evolución de la solvencia del sistema financiero.

Habida cuenta de que las medidas que se propician por el presente proyecto establecen una modificación de la relación de cambio de la moneda nacional respecto de las divisas extranjeras, se contempla que el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las medidas tendientes a disminuir el eventual impacto que se produzca sobre el patrimonio de las personas físicas y jurídicas que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras.

Se contempla, asimismo, que los saldos deudores de titulares de tarjetas de crédito o de débito, correspondientes a consumos realizados en el país, deberán ser consignados en pesos y pagaderos en pesos, y que sólo podrán consignarse en dólares u otras divisas los consumos realizados fuera del país.

Respecto de los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público a partir de la sanción de la ley 23.928 y modificatoria, incluyendo obras y servicios públicos, se propone dejar sin efecto las cláusulas de ajuste en dólares o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países.



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*



Asimismo, se propone disponer que los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedarán establecidos en pesos a la relación de cambio un peso igual un dólar estadounidense.

A tenor de los cambios así impulsados, se incluye la autorización expresa al Poder Ejecutivo nacional para renegociar tales contratos.

Tratándose de contratos de prestación de servicios públicos, la renegociación a encararse deberá tomar en consideración los siguientes criterios: 1) El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos. 2) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente. 3) El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios. 4) La seguridad de los sistemas comprendidos, y 5) La rentabilidad de las empresas.

En vista de los cambios propuestos, se establece que ello en ningún caso justificará o habilitará a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

En lo que resulta materia de prestaciones dinerarias originadas en contratos celebrados entre particulares, en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares, se prevé un esquema de transición que posibilite el avenimiento a términos equitativos entre las partes, previéndose a tal efecto los mecanismos tendientes a posibilitar la composición de los respectivos intereses.

Por otra parte, y atendiendo a la actual circunstancia, bajo cuyas apremiantes condiciones fiscales y monetarias se han debido emitir distintos títulos nacionales y provinciales que circulan como sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país, se postula que el Poder Ejecutivo nacional establezca los recaudos necesarios para proceder, oportunamente, al canje de tales títulos a fin de posibilitar el necesario reordenamiento monetario del país.

Teniendo en cuenta que de los cambios que se promueven para consideración del Honorable Congreso de la Nación pudieran derivarse efectos indeseados o conductas que trasuntan en una eventual distorsión de los mercados o comportamientos de naturaleza monopólica, se incorpora entre sus disposiciones facultar al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

Por último, se incorporan al proyecto elevado disposiciones de naturaleza transitoria y complementaria.

Se propone, como lógica indispensable a la naturaleza del proyecto puesto a consideración, que el mismo invista el carácter de norma de orden público, entendiéndose que ninguna persona podrá alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos, disponiéndose en forma sucesánea la derogación de toda otra disposición que se oponga a sus estipulaciones.

Por otra parte, se incluye la invitación a los estados provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las municipalidades a dictar normas de adhesión que recepten diversas disposiciones comprendidas dentro del proyecto.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 26

Eduardo A. Duhalde.  
Jorge M. Capitanich.

#### PROYECTO DE LEY



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Secretaría Parlamentaria  
Dirección de Información Parlamentaria

El Senado y Cámara de Diputados,...

## LEY DE EMERGENCIA PUBLICA Y DE REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO

### TITULO I

#### Declaración de emergencia pública

**Artículo 1º – Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, por el término de dos (2) años, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:**

1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos.
3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.
4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2º.

### TITULO II

#### Del régimen cambiario

**Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las razones de emergencia pública definidas en el artículo 1º, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.**

### TITULO III

#### De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad

**Art. 3º – Deróganse los artículos 1º, 2º, 8º, 9º, 12, 13 y 14 de la ley 23.928 con las modificaciones incorporadas por la ley 25.445.**

**Art. 4º – Modifícase el texto de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 de la ley 23.928 y su modificatorio, que quedarán redactados del siguiente modo:**

**Artículo 3º – El Banco Central de la República Argentina podrá comprar y vender divisas con sus propios recursos o emitiendo los pesos necesarios para tal fin, al precio establecido conforme al sistema definido por el Poder Ejecutivo nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario.**

**Artículo 4º – En todo momento, las reservas del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.**

**Artículo 5º: El Banco Central de la República Argentina deberá reflejar en su balance y estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por otro lado.**

**Artículo 6º: Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse**



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*

Dirección de Información Parlamentaria  
Depto. De Análisis y Coordinación Operativa



exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuenta corriente o cuentas especiales.

**Artículo 7º:** El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley.

Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto.

**Artículo 10:** Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional – inclusive convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.

**Art. 5º –** Mantiénese, con las excepciones y alcances establecidos en la presente ley, la redacción dispuesta en el artículo 11 de la ley 23.928, para los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil.

#### TÍTULO IV

De la reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de esta ley

#### Capítulo I

#### *De las obligaciones vinculadas al sistema financiero*

**Art. 6º –** El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el eventual impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2º de la presente ley, sobre el patrimonio de las personas físicas y jurídicas que mantuviesen con el sistema financiero deudas o créditos nominados en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto dispondrá las normas necesarias para su reestructuración. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo nacional queda facultado para reestructurar las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar (u\$s 1), en deudas con el sistema financiero cuyo importe en su origen no fuese superior a dólares cien mil (u\$s 100.000) con relación a créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda familiar y única, a la refacción de vivienda familiar y única, créditos personales, créditos prendarios para adquisición de automotores y de empresas pequeñas y medianas.

El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas, las que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*





facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos, incluidos préstamos internacionales.

**Art. 7º** – Los saldos deudores de titulares de tarjetas de crédito y todo préstamo vigente al 31 de noviembre de 2001 que fueran pactados en pesos y transformados a dólares por el decreto 1.570/01, correspondientes a consumos realizados en el país, serán consignados en pesos y pagaderos en pesos. Sólo podrán consignarse en dólares, u otras divisas, los consumos realizados fuera del país. Los créditos y saldos deudores pendientes de pago a la fecha de promulgación de la presente ley, serán cancelados, en su totalidad, en pesos a la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar estadounidense (u\$s 1).

## Capítulo II

### *De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público*

**Art. 8º** – Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público a partir de la sanción de la ley 23.928, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar estadounidense (u\$s 1).

**Art. 9º** – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.

El proceso de renegociación será controlado por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

**Art. 10.** – Las disposiciones previstas en los artículos 8º y 9º de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

## Capítulo III

### *De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero*

**Art. 11.** – Las prestaciones dinerarias exigibles a la fecha de promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares, quedan sometidas a la siguiente regulación: 1) las prestaciones serán canceladas en pesos a la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar estadounidense (u\$s 1), en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos que se establecen seguidamente; 2) las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*



en el artículo 2° de la presente ley durante un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días. Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las diferencias que, eventualmente, existan entre los pagos dados a cuenta y los valores definitivamente acordados; 3) de no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias. En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1.198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido.

#### TITULO V

##### Del canje de títulos

**Art. 12.** – Dentro del plazo y en la forma que oportunamente establezca la reglamentación, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los recaudos necesarios para proceder al canje de los títulos nacionales y provinciales que hubiesen sido emitidos como sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.

#### TITULO VI

##### De la protección de usuarios y consumidores

**Art. 13.** – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica.

#### TITULO VII

##### De las disposiciones complementarias y transitorias

**Art. 14.** – Todos los contratos, de cualquier naturaleza, que se celebren a partir de la sanción de la presente ley se regirán por las previsiones del artículo 1.197 del Código Civil.

**Art. 15.** – Invítase a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a adherir a las disposiciones de los artículos 8°, 9° y 10 de la presente ley.

**Art. 16.** – Suspéndese la aplicación de la ley 25.466, por el término máximo de dos (2) años, o hasta la oportunidad en que el Poder Ejecutivo nacional considere superada la emergencia del sistema financiero, con relación a los depósitos afectados por el decreto 1.570/01.

**Art. 17.** – Suspéndese la aplicación de la ley 25.557, por el término de hasta ciento ochenta (180) días. Por el mismo plazo quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.

**Art. 18.** – Los resultados netos negativos que tengan su origen en la aplicación del tipo de cambio a que se refiere el artículo 2° de la presente ley sobre activos y pasivos en moneda extranjera existentes a la fecha de su sanción, sólo serán deducibles en el impuesto a las ganancias en la proporción de un veinte por ciento (20 %) anual en cada uno de los primeros cinco ejercicios que cierran con posterioridad a la vigencia de la ley. Lo dispuesto precedentemente sólo será de aplicación para los sujetos cuyos ingresos anuales o patrimonio superen los límites establecidos en el artículo 127, capítulo XIII, del título I, de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Secretaría Parlamentaria  
Dirección de Información Parlamentaria

**Art. 19. – Modifícase el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo:**

Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste, conferirá traslado con calidad de autos a la parte que petitionó la medida por el plazo de cinco (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al procurador general de la Nación, dictará sentencia confirmando o revocando la medida.

**Art. 20. – La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.**

**Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.**

Eduardo A. Duhalde.  
Jorge M. Capitanich.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.



Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas reconociendo y citando la fuente: *Dirección de Información Parlamentaria*

Dirección de Información Parlamentaria  
Depto. De Análisis y Coordinación Operativa